

9

96

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1793 - 2009

LIMA

- 1 -

Lima, veintinueve de septiembre de dos mil diez.-

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción contra la sentencia absolutoria de fojas seis mil ciento setenta y siete, del veintitrés de marzo de dos mil nueve; interviniendo como ponente el señor Santa María Morillo; de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO:** **Primero:** Que el Procurador Público en su recurso formalizado de fojas seis mil doscientos cuarenta y tres alega, en términos genéricos, que la Sala Penal Superior no tuvo en cuenta los elementos de prueba que acreditaban la responsabilidad penal de los encausados Juan Casas Uceda, Samuel Félix Quijano Vidal, Ricardo Olguín Bazán y Domingo Portugal Arias, entre ellos se tiene el propio reconocimiento efectuado en sede preliminar por el encausado Manuel Del Solar Ayllón -fallecido- de haber tenido conocimiento que el terreno que pretendía adquirir estaba ocupado y que su propósito no era la tenencia del bien para el uso de fines agrícolas sino que sus fines eran totalmente ajenos a los intereses del Estado, pues pretendía lotizarlos para fines urbanos. **Segundo:** Que según los cargos materia de acusación fiscal de fojas cuatro mil quinientos noventa y uno -ampliada a fojas cuatro mil setecientos cincuenta y seis-, se imputa a los encausados Domingo Jaime Portugal Arias -en su condición de ex Director del Proyecto Especial de Titulación de Tierras-, Juan Casas Uceda -ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural-, Ricardo Genaro Olguín Baza -ex Director General de la Unidad Agraria Departamental de Lima - Callao-, todos ellos funcionarios del Ministerio de Agricultura; y Samuel Félix Quijano Vidal -Registrador Público- junto a los encausados Manuel Del Solar Ayllón y Julia Málaga Lama, concertaron para procurar la adjudicación de terrenos agrícolas de propiedad del Estado -que con anterioridad le había pertenecido a la Cooperativa Agraria Usuarios de Chilca Limitada y que cayó en

9x

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1793 - 2009
LIMA

- 2 -

abandono- por un precio por debajo de su valor real, para fines distintos a la agricultura, ocasionando con ello un perjuicio al erario nacional; que, dentro de ese contexto, el representante del Ministerio Público sustenta su tesis inculpativa precisando que los encausados incurrieron en una serie de irregularidades a lo largo del proceso de licitación que evidenciaría la existencia de un acuerdo colusorio entre ellos. **Tercero:** Que, de la prueba acopiada en autos, no se ha logrado acreditar de manera fehaciente la responsabilidad penal de los encausados Juan Casas Uceda, Samuel Félix Quijano Vidal, Ricardo Genaro Olgún Bazán y Domingo Jaime Portuguez Arias en los hechos juzgados; que, al respecto se tiene lo siguiente: **1)** Al encausado Casas Uceda se le imputa su intervención en la emisión de la Resolución Directoral Ejecutiva número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-AG-PETT de fecha dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cinco -véase fojas doscientos setenta y uno-, mediante la cual resolvió adjudicar a título oneroso con reserva de dominio hasta la cancelación total del precio a favor de Del Solar Ayllón, la extensión superficial de ochenta y un hectáreas de tierra rústica en el predio "San Javier Alto", del Distrito de Chilca, sin preocuparse que los terrenos adjudicados tuvieran fines agrícolas, y la suscripción del contrato de compra-venta número dos mil quinientos siete-AG-PETT del cuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco, del predio antes citado -que al parecer pertenecía a la Cooperativa Agraria de Usuarios Chilca Limitada- a favor de Del Solar Ayllón; sin embargo, es de enfatizar que la Resolución Directoral Ejecutiva número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-AG-PETT fue materia de recurso de apelación por parte de la Cooperativa Agraria de Usuarios Chilca Limitada, lo que dio lugar a la dación de la Resolución Ministerial número cero cero cincuenta y uno-noventa y seis-AG -véase fojas cinco mil trescientos treinta y ocho-, que resolvió declarar infundado el citado medio impugnatorio; decisión que fue ratificada en el fuero judicial, mediante Ejecutoria Suprema expedida por la Sala de Derecho Constitucional y

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1793 - 2009
LIMA

- 3 -

Social -véase fojas ciento setenta y cuatro-; que, siendo así, queda claro que la citada Resolución Directoral Ejecutiva expedida por el encausado Casas Uceda, que ahora se cuestiona, al haber sido validada tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, surtió efectos tanto legales como materiales; que, no obstante ello, es de precisar que el encausado Casas Uceda, al expedir la mencionada Resolución Directoral Ejecutiva lo hizo respaldado en base al informe técnico número cuatrocientos veintidós-noventa y cinco-AG-PETT-DY/CPR -véase fojas mil cuatrocientos setenta y cuatro-, el cual concluyó que el expediente de abandono de tierras rústicas, presentado por Manuel Del Solar Ayllón cumplió el procedimiento de ley, por tanto era procedente la adjudicación del bien a su favor, asimismo, se tuvo en cuenta el Informe legal número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-DAL-PETT -véase fojas mil cuatrocientos setenta y ocho- el cual precisó que el bien sub litis podía adjudicarse a favor de Manuel Del Solar Ayllón; que es de tener en cuenta que los aludidos informes fueron expedidos por Oscar Alfredo Cervantes Mendoza -Supervisor- e Hipólito Córdova Peña Asesor Legal-, quienes en sus declaraciones testimoniales de fojas cinco mil ciento dos y cinco mil ciento sesenta y cuatro vuelta, respectivamente, ratificaron sus informes y señalaron que estuvieron ajustados a Ley; por lo que el hecho de haber suscrito el contrato de compraventa del citado terreno rústico, al ser un bien del Estado a través del Ministerio de Agricultura- caído en abandono, y al determinarse que la adjudicación a favor de Manuel Del Solar Ayllón fue un acto legal, se concluye que el contrato también fue legal; por tanto la absolución decretada a favor del encausado Casas Uceda se encuentra arreglada a Ley. II) En cuanto al encausado Olguín Bazán, en su condición de Director General de la Unidad Agraria Departamental de Lima - Callao, se le imputa la expedición de la Resolución Directoral número cero cuatro-noventa y siete.AG.UAD.LC -que modificó la Resolución Directoral número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-AG-PETT y

99

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1793 - 2009
LIMA

- 4 -

el contrato de compra-venta número dos mil quinientos siete-AG-PETT- beneficiando a Del Solar Ayllón con un descuento de ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y tres nuevos soles con cuarenta y siete céntimos, además de suspender el cumplimiento de los pagos inicialmente establecidos en la resolución de adjudicación; que, sin embargo, para la nueva revalorización del terreno que se cuestiona, se tuvo en cuenta el Informe técnico número veintiséis-noventa y siete-PETT-DT, CPR -véase fojas dos mil cien-, elaborado por el ingeniero José Ochoa Varela, quien determinó que la valorización técnica actualizada -según CONATA y que correspondía a un terreno de cuarta categoría-, ascendía a la suma de ciento treinta y seis mil seiscientos setenta y un nuevos soles con cincuenta y tres céntimos; que, asimismo, se tuvo en cuenta el Informe legal número cero trece-noventa y siete-AG-UAD.LC-OAJ -véase fojas cinco mil trescientos cuarenta y siete-, elaborado por la abogada Felícita Reyes Ramírez, quien opinó que estando al nuevo precio del terreno, correspondía la modificación del contrato de compra-venta del terreno rústico a favor de Del Solar Ayllón; que, no obstante ello, también se valoró el Informe legal número ciento uno-noventa y seis-AG-UAD.LC/OAJ -véase fojas mil quinientos ochenta y uno-, expedido por la abogada Pilar Pineda Flores, que concluyó que era procedente acceder a la petición de suspenderse los pagos pendientes hasta que se resolvieran los procesos judiciales existentes, lo cual motivó a que se expidiera la Resolución Directoral número ciento veinticinco-noventa y seis-AG-UAD-LC -véase fojas doscientos setenta y siete-; instrumentales en las que se basó el procesado Olguín Bazán para emitir la resolución Directoral número cero cuatro-noventa y siete-AG.UAD.LC -que modificó la Resolución Directoral número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-AG-PETT y el contrato de compra-venta número dos mil quinientos siete-AG-PETT-; por tanto, en el accionar del citado Olguín Bazán no se aprecia irregularidad alguna; motivo por el cual su absolución se encuentra arreglada a ley; III). En cuanto al procesado Portuguez Arias, en su calidad de Director Ejecutivo del Proyecto Especial de

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1793 - 2009

LIMA

- 5 -

Tierras y Catastro Rural -PETT-, se le imputa haber autorizado mediante la Resolución Directoral número cero ochenta y seis-dos mil cinco-AG-PETT-DE del trece de julio de dos mil cinco-vease fojas doscientos noventa y cinco-, que se levante la suspensión de la ejecución del pago pendiente por la adjudicación efectuada a Del Solar Ayllón -con lo cual se habría excedido en sus atribuciones y el plazo de cumplimiento de la obligación-; sin embargo, dicha conducta tuvo como sustento las conclusiones del Informe Legal número cero treinta y seis-dos mil cuatro-AG-PETT-OPERLC-AL -fojas setecientos veinticuatro-, expedido por José Eduardo Chirinos Paredes, quien en calidad de asesor legal de la entidad agraviada concluyó que era factible levantar la suspensión de la ejecución del pago pendiente por la adjudicación efectuada a favor de Del Solar Ayllón, conforme así lo ratificó al ser examinado en sede plenarial -fojas cinco mil cincuenta y cuatro vuelta-; que es de tener en cuenta que la Resolución Directoral Ejecutiva número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-AG-PETT, al ser cuestionada tanto en la vía administrativa como judicial, resultó ser un acto legal, además de los Informes legales citados precedentemente; por tanto, se concluye que la conducta del citado encausado se encuentra arreglada a Ley.

iv) Que, finalmente, en cuanto al procesado Quijano Vidal, en su condición de Registrador Público de la Oficina Registral de Lima - Callao, se le imputa la inscripción de la compra-venta hipoteca legal otorgada por el Ministerio de Agricultura -respecto del predio materia de litis a favor de los acusados Del Solar Ayllón y Julia Málaga Lama-, solicitud que, según el Ministerio Público, evaluó y calificó de manera irregular, pues inscribió la compra-venta del terreno que se cuestiona como una "hipoteca legal" cuando en realidad se trataba de una "reserva de dominio"; que, si bien es cierto el aludido encausado pudo haber incurrido en un error material al inscribir el bien materia de compra-venta como una "hipoteca legal", cuando en realidad se trataba de una "reserva de dominio"; sin embargo, de la revisión de autos no se aprecian otros elementos de prueba

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R. N. N° 1793 - 2009

LIMA

- 6 -

que acrediten que se habría coludido de manera dolosa con el procesado Del Solar Ayllón con la finalidad de favorecerlo; asimismo, es de tener en cuenta que el referido encausado para proceder a inscribir en Registro Públicos de Lima - Callao el terreno a favor de Del Solar Ayllón, tuvo en cuenta la Resolución Directoral Ejecutiva número ciento cuarenta y siete-noventa y cinco-AG-PETT -véase declaración en sesión de audiencia de fojas cuatro mil novecientos ochenta-, el cual disponía la entrega del terreno que se cuestiona a favor de aquél y precisó que verificó el Decreto Supremo que otorgaba en adjudicación al Ministerio de Agricultura los terrenos rústicos -véase instructiva de fojas cuatro mil doscientos setenta y tres-; por tanto, se concluye que su accionar no reviste contenido penal alguno y no constituye sustento de responsabilidad en contra de aquél, en consecuencia, su absolución se encuentra arreglada a ley. **Cuarto:** Que, aunado a lo antes expuesto, debe precisarse que los funcionarios que expedieron los Informes legales que sirvieron de base para que los encausados emitieran las cuestionadas Resoluciones Directorales, de modo alguno han sido comprendidos en la presente causa, precisamente porque actuaron con arreglo a ley; que, siendo así, es de concluir que los encausados se basaron en dichos informes para emitir las resoluciones que ahora se cuestionan; que, a ello, debe agregarse la coherente y uniforme negativa de los encausados Casas Uceda, Olguín Bazán, Portuñuelo Arias y Quijano Vidal en los hechos materia de acusación fiscal. **Quinto:** Que siendo así, mal haría este Supremo Tribunal en declarar la nulidad de la recurrida cuando de autos no se advierten elementos de prueba que acrediten de manera fehaciente la comisión del delito juzgado y, por ende, la responsabilidad penal de los mencionados encausados, por cuanto los cargos que se les atribuyen no han sido probados -ello ante la deficiencia en los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público y del Procurador Público para crear certeza en el juzgador y demostrar la responsabilidad penal de los aludidos procesados-; que, en consecuencia, ante la falta de datos,

102

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R. N. N° 1793 - 2009
LIMA

- 7 -

objetivos aún cuando periféricos que consoliden la inculpación, es de concluir -por falta de pruebas- que no se ha podido enervar la presunción de inocencia que la Constitución reconoce a toda justiciable -previsto en el artículo dos, inciso veinticuatro, parágrafo "e" de la Constitución Política del Perú-, por tanto, la absolución dispuesta por el Tribunal Superior se encuentra arreglada a ley, máxime si respecto del material probatorio la motivación de la sentencia no es inexistente, insuficiente, contradictoria o ilógica; por tanto los agravios que se alegan en el escrito de fojas seis mil doscientos cuarenta y tres devienen en inatendibles. Por estos fundamentos, declararon **NO HABER NULIDAD** en la sentencia de fojas seis mil ciento treinta y siete, del veintitrés de marzo de dos mil nueve, que absolvió a Juan José Uzeda, Samuel Félix Quijano Vidal, Ricardo Genaro Olguín Bazán y Domingo Jaime Portuguez Arias -y no "Samuel Quijano Vidal" y "Jaime Portuguez Arias" como se consignó en la sentencia- de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra la Administración Pública -colusión desleal en agravio del Estado -Proyecto Especial de Tierras y Catastro Rural- ETRC-, con lo demás que la sentencia contiene y es materia del recurso; intervienen los señores Calderón Castillo, Príncipe Trujillo por licencia del señor Rodríguez Tineo e impedimento del señor Neyra Flores, respectivamente; y los devolvieron.-

SS.

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARÍA MORILLO

SMM/ovgm

SE PUBLICA CONFORME A LEY

MIGUEL ANGEL SOTELÓ TASAYCO
SECRETARIO (a)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

27 DIC. 2010

